

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por FABIÁN ESTIV LOPERA NARANJO contra INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES S.A.S - IRCC S.A.S- (Radicado **05001-31-05-019-2018-00176-01**).

ANTECEDENTES

El promotor aspira, previa determinación de la existencia de un contrato de trabajo con la demandada a partir del 16 de junio de 2016, se declare la presencia de conductas constitutivas de acoso laboral encuadradas en los artículos 2 y 4 de la Ley 1010 de 2006 y la terminación unilateral e injusta del despido acaecido el 12 de mayo de 2017, para que en consecuencia, se imponga el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa del artículo 64 del CST, una multa de 10 SMLMV para la persona que realizó las conductas de acoso laboral, y un 50% del costo de tratamiento de enfermedades profesionales originadas a partir del acoso laboral sufrido, además de las costas del proceso.

Como hechos relevantes de sus súplicas narró que con la convocada suscribió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de junio de 2016 para ejecutar la labor de administrador en la ciudad de Medellín teniendo dentro de sus funciones el arqueado de cajas de venta TPV, cierres de caja y apertura de la misma

devengando un salario por la suma de \$1.591.000 pagadero en quincenas vencidas. Señala que al momento de tomar posesión del cargo existía un faltante de más de \$500.000 que era conocido por su coordinador Pedro Ballén y la líder de turno Mónica y que era responsabilidad de la anterior administradora Jesica Zárate que pagaba a cuotas de 8 meses, de cuya forma de pago fue enterada María José Sosa manteniéndose incompleta la caja en ese lapso, siendo citado el 11 de mayo de 2017 a una diligencia de descargos por un manejo indebido dado a los dineros del punto de venta Milla de Oro, para cuando argumentó que sacó de su billetera personal dinero para reunirlo con el del punto de venta, con la finalidad de cubrir el dinero faltante desde que se hizo la entrega y evitar persecución laboral, señalando que la diferencia dada en los dos arqueos se debió a que la persona que los realizaba no sabía manejar “*unoe*” por ser gerente de otra cadena de restaurantes y por tanto, no sabía realizar informes de ventas ni subir la información a la plataforma. Aduce que René y Marta Londoño iban a cerrar el arqueo con el dinero faltante, pero solicitó el cierre de las cajas registradoras para ver las ventas en tiempo real y al repetir el arqueo no encontraron diferencias sin que existiera entre uno y otro contacto con los dineros de la caja. El 12 de mayo de 2017 le fue terminado el contrato de trabajo por atribuirle el mal manejo del dinero, para cuando se estaban desplegando desde hacía 15 días conductas constitutivas de acoso laboral de parte de Marta Londoño.

ICRR S.A.S dio respuesta en oportunidad al libelo con oposición de las pretensiones. Aceptó el vínculo surtido con el actor bajo un contrato de trabajo a término indefinido a efectos de desempeñarse como administrador de punto de venta. Negó el conocimiento de la compañía del faltante en la caja del punto a cargo del demandante desde el momento en que se dio inicio a la relación laboral y se hizo la entrega, advirtiendo haberse evidenciado en los arqueos que el trabajador ingresó dineros propios en la caja fuerte para no dar cuenta del faltante, lo que dio lugar al despido con justa causa. Negó conductas de acoso laboral desplegadas en contra del demandante. Formuló como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción y caducidad.

El trámite del proceso correspondió por reparto al Juzgado Diecinueve laboral del Circuito de Medellín quien promovió el procedimiento por los ritos de la Ley 1149 de 2007, autoridad judicial que por auto del 21 de abril de 2021 dispuso su

remisión al Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín en cumplimiento del Acuerdo N° CSJANTA21-16 del 24 de febrero de 2021, despacho que avocó conocimiento por decisión del 04 de octubre de 2021 (Archivo 03) y mediante providencia del 13 de octubre de 2021, ABSOLVIÓ a la demandada de las pretensiones elevadas en su contra por encontrar debidamente probadas las justas causas del despido y no encontrar configurada ninguna de las conductas enlistadas en el artículo 7 de la Ley 1010 de 2006, sin imposición de costas procesales por estar actuando el demandante bajo amparo de pobreza.

La mandataria judicial de la activa se apartó de la decisión señalando que disiente de haberse dado por demostradas las causales del despido, aduciendo un desconocimiento de la prueba que se aportó, sin que se hiciera la valoración adecuada de la testigo traída por esta parte al proceso bajo el argumento de no haber presenciado los hechos, el que considera suficiente para dilucidar el asunto del despido y demostrar lo injusto del despido, en tanto al trabajador no se le brindó oportunidad de defensa, no hubo llamados de atención y en cuanto al arqueo se realizó en tres oportunidades en un mes a él exclusivamente. Agregó que deben imponerse costas procesales a la demandada.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado

CONSIDERACIONES

A partir de los argumentos expuestos en la apelación con respeto al principio de consonancia, compete a la Sala definir si la justa causa alegada por la pasiva encuadra o no en una falta grave cometida por el actor que dé paso a la procedencia de la indemnización por despido sin justa causa.

Para la definición del asunto, comienza por recordar la Sala que, el contrato de trabajo puede llegar a su fin por diferentes razones; bien porque mutuamente lo acuerdan las partes o bien por la decisión unilateral de alguna de ellas con justa o sin justa causa (Art 61 y siguientes del CST).

En el asunto es indiscutido que la relación laboral que se dio entre las partes terminó por una decisión unilateral de quien fungió como el dispensador del empleo, evento en el que se traslada la carga de la prueba, correspondiendo a la convocada corroborar que su determinación tuvo un sustento legal que la exonera de la indemnización contemplada en el artículo 64 del CST.

La misiva de terminación que data del 12 de mayo de 2017 (Págs. 18-21/005) da cuenta de las razones que dieron lugar a extinguir el vínculo que se venía ejecutando con el señor Lopera Naranjo, oportunidad en la que la empresa enunció como norma infringida, la contenida en el artículo 62 del CST numeral 10, que establece *“la sistemática inejecución, sin razones válidas por parte del trabajador de las obligaciones convencionales y legales”*, partiéndose del hecho de haber dado un indebido manejo a los dineros del punto de venta Milla de Oro, en virtud al arqueo de caja adelantado el 1 de mayo de 2017 donde se encuentra un faltante, que dio lugar a que sacara de su billetera dinero que juntó con el de la caja según video, lo que arrojó en la nueva revisión la ausencia de ese faltante, conducta que por demás consideró confesada en la diligencia de descargos que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2017 (Págs. 28-31/001).

En ese orden, a fin de corroborar la pasiva la configuración del comportamiento endilgado, arribó una versión libre rendida por el empleado Efraín Suárez (Págs. 7-8/002) en donde informa que evidenció para el día de los hechos de manera personal que su compañero Fabián Lopera saca dos billetes de su billetera y los deja sobre el escritorio, luego retira el dinero de la caja fuerte y los junta, versión que es corroborada en el video arribado por la enjuiciada y que se observa en la parte superior ocurre a las 11:45 a.m. del día 01 de mayo de 2017 (Archivo VideoPruebaDemandada).

También en el desarrollo de este trámite judicial, se recibieron los testimonios de MARTA CECILIA LONDOÑO y EDWIN RICARDO ESCOBAR GÓMEZ. La primera, como Directora de negocios Especiales dentro de la compañía, fungió como testigo del arqueo que fue realizado el 01 de mayo de 2017, quien adujo que en el punto de venta de Milla de Oro donde el demandante era el administrador, en esa fecha se realizó con René, otro administrador con experiencia de aproximadamente 15 años, una auditoría entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m., lo que se acostumbra hacer de manera aleatoria, encontrándose un faltante que al

realizarse una segunda verificación da cero, arguyendo que el empleado Efraín sale de la oficina donde se hallaba ubicada la caja fuerte -segundo piso- e informa que Fabián Suárez ingresó dinero propio, para lo que se solicitan los videos respectivos, obtenidos 1 o 2 días después donde logra corroborarse lo afirmado por el señor Suárez. Explicó que lo que condujo a los descargos no fue el faltante, sino la manipulación del dinero en medio de un arqueo, que tampoco es viable por fuera de él, pues no debe combinarse dineros propios, cuya prohibición está contenida en el reglamento. Agregó desconocer faltantes a cargo de la administradora anterior, acotando que esas irregularidades en caja deben ser informadas a los superiores, aunque por parte del director, el coordinador y los administradores pueden tener definiciones entre ellos.

El segundo deponente por su parte, es el Director Regional de Hamburguesas el Corral, quien compartió para el año 2016 trabajo con el actor y participó en los descargos desplegados por el evento ocurrido el 01 de mayo de 2017, conoció el video, recibió la versión libre de Efraín Suárez e indagó sobre el descuadre encontrado en caja, relacionado con el dinero incluido desde su billetera con el que se permitió encontrar en un segundo arqueo el dinero completo. Explicó que las auditorías se hacen de forma aleatoria para verificar el correcto manejo del dinero de los restaurantes y en caso de resultar una pérdida de dinero por cualquier razón, el procedimiento debía llevarse a cabo de forma transparente avisando al jefe inmediato para proceder con un descuento de nómina a fin de mantener la cantidad de dinero inicial entregada. Aseguró que no era conocido un descuadre proveniente de la anterior administradora y que el administrador debió recibir el dinero completo de lo que se debió encargar el coordinador.

El empleado por ese suceso fue llamado a descargos (Págs. 28-31/001) en los que participaron como testigos Larry Jiménez y Edwin Escobar, oportunidad en la que el señor Lopera aceptó que de su billetera completó un dinero que le habían dejado como faltante desde que le entregaron el punto, advirtiéndolo que no estaba permitido ese procedimiento, y que aunque no avisó en ese momento, no lo hizo de forma oculta pues contaba con previa autorización de su superior María José. Explicó que el faltante de \$300.000 encontrado luego de anexar los \$100.000 se debió a que la persona que estaba realizando el arqueo- René- no sabía manejar “unoe”, por lo que al hacerse el segundo arqueo con cierre de cajas,

ya se obtuvo el dato real sin descuadre. Agregó que el faltante lo cubrió de su bolsillo, para evitar la persecución laboral del que estaba siendo sujeto.

Esta versión la ratificó a través del interrogatorio de parte absuelto, donde enfatizó en que el anexo del dinero de su billetera se realizó antes de iniciar el arqueo y que la diferencia encontrada en el primer recuento se debió a un desconocimiento en el manejo del sistema de parte de René, cuya correcta operación de parte de otro administrador - Larry-, dio lugar a que desapareciera el faltante. Recalcó que ese faltante provenía de un descuadre adquirido por la anterior administración a cargo de Jesica Zárate por valor de \$500.000, el que terminó de cubrirse ese 01 de mayo de 2017 con los \$100.000 que incorporó a la caja antes del inicio del arqueo, situación que era conocida por sus superiores María José Sosa y Pedro Ballén, cuyo cuadre de caja diario se hacía con un recibo de caja que reemplazaba el dinero pendiente y se reportaba por medio de un cuadro en Excel.

Jazmín Aidé Rivas traída al proceso por la activa, era una líder de punto de venta que aunque no se encontraba laborando en el de Milla de Oro para mayo de 2017, si adujo que desde el ingreso de Fabián había un faltante de \$500.000 que a ella personalmente le había correspondido conocer en los cuadros de caja que realizó en apoyo a la anterior administradora Jesica Zárate, el que se produjo por un inconveniente surgido de un flete de materia de prima de donas, que la encargada se comprometió a reembolsar, lo que hacía por consignación a Fabián o por envío a través de un jefe. Que igualmente, ese dinero debía ser contabilizado con la base, por medio de un recibo de caja donde se iban restando los abonos, situación que era conocida por los superiores María José y Ballén pues se reportaba en los informes diarios incluso previo a la vinculación de Fabián. Agregó que los \$100.000 que Fabián sumó a la caja fue el saldo final de ese compromiso que incluso provino de su propio bolsillo al ver los problemas que ello estaba acarreando.

A partir de las anteriores probanzas, lo que surge evidente para esta Sala de Decisión es que el demandante el 01 de mayo de 2017 fue visitado para ser objeto de una auditoría que incluía la verificación de los dineros contenidos tanto en la caja registradora como en la caja fuerte del punto de venta de Milla de Oro que estaba a su cargo como administrador, en donde en un primer momento, se

encontró un faltante de \$300.000 y efectuado un segundo arqueo, el chequeo no arrojó diferencias.

El punto de distancia entre las partes a partir de la intelección que realiza la Sala, radica en que la parte opositora afirma que se consolidó una falta grave de parte del trabajador en tanto al verificar un descuadre de caja luego del primer balance en el marco de sus funciones aceptadas, introdujo de su peculio dinero que dio paso a que en la segunda revisión el descuadre no existiera, con lo que se endilga un indebido manejo de los recursos, y bajo ese contexto, se atribuye una inejecución sistemática de sus obligaciones.

En ese orden, lo que revela la prueba es que en efecto el señor Lopera sacó de su billetera dos billetes que combinó con el dinero de la caja fuerte, conducta que en ningún momento ha sido negado por el actor pues así lo hizo saber desde la diligencia de descargos que se realizó el 11 de mayo de 2017. Ahora, si se acude a la versión libre de Efraín Suárez, éste narra igual situación, pero en momento alguno determina de cara al arqueo realizado ese día, el momento preciso en que ello ocurre, pero el video, evidencia que esa situación acaeció aproximadamente a las 11:45 a.m, hora en la que sostiene la señora Londoño se estaba efectuando el segundo control, la que encuadra con el mismo dicho del actor cuando afirmó que Marta y René se hicieron presentes en el punto de venta entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m, para luego decir que una vez llegaron iban a iniciar la diligencia cuando introdujo el dinero, por lo que no resulta concordante la manifestación referida a que llegando al medio día ese arqueo no había iniciado y que el dinero entonces se combinó previo a la apertura de ese chequeo.

Es así como atendiendo a que Marta Londoño presenció la diligencia de auditoría y conoció los tiempos y verificaciones realizadas en el punto de venta Milla de Oro, y adujo que para las 11:45 a.m. estaban en medio del arqueo, es que es dable darse credibilidad a su dicho por tratarse de una fuente directa de la información y evidenciarse espontánea, sin probanza que derribe su imparcialidad por demostrarse un interés de perjudicar al actor, o que en efecto estuviera desplegando un plan de persecución laboral en contra suya que derive en el cuestionamiento de su declaración, pues ello así no fue demostrado por la activa y no puede desprenderse del simple hecho de haber concurrido a tal verificación rutinaria como testigo, por lo que en coherencia con la versión escrita de Efraín

Suárez y las imágenes que traslucen del video, es viable dar razón a la conclusión a la que arribó la convocada, en cuanto a que el actor en medio de la auditoría de la que estaba siendo sujeto y sin dar aviso, dio manejo a los dineros de la caja fuerte donde se había encontrado un faltante, aspecto sobre el que ninguna probanza en contrario se arribó, no bastando el dicho del implicado para dar por sentados fundamentos de hecho disímiles, resultando cuestionable que de su propia declaración se extraigan aspectos contrapuestos cuando advierte la autorización proveniente de sus superiores para ingresar el dinero a la caja, pero luego se afirma que lo hizo para no ser incriminado, a más de agregarse en la primera versión que la antigua administradora cubría un faltante con consignación a su cuenta personal, siendo expuesto en el desarrollo de la práctica de pruebas que el procedimiento para esos eventos es el descuento por nómina y la empleada Zárate continuaba vinculada a la compañía en la ciudad de Bogotá.

Debe decirse que, aunque contrario a lo advertido por Marta Londoño, dentro del Reglamento Interno de Trabajo (Págs. 27-32/005 y 1-32/006) ningún protocolo se encontró establecido para el procedimiento particular de arqueo con los administradores o líderes de punto de venta; quedó si clara, a partir de las afirmaciones enfáticas de esa testigo y Edwin Ricardo Escobar, la prohibición de manipular los dineros de las ventas con los propios, lo que por demás se aceptó por el trabajador en la diligencia de descargos, a más de evidenciarse que tal hecho fue desplegado por el polo activo durante la gestión sorpresiva que se estaba cumpliendo, bajo la convicción de evitar inconvenientes o en voces propias una persecución laboral, lo que quiere decir que, si justo dentro del lapso de su auditoría el actor estaba impidiendo que se pusiera en evidencia un faltante, es dable pregonarse una ausencia de transparencia en el manejo de dineros, ya que aunque no tiene ningún apoyo probatorio más allá de su interrogatorio de parte, pues el pantallazo de whatsapp allegado (Pág. 22/001) no tiene la entidad de probar ningún hecho por asistir razón a la *A quo* en cuanto advierte la indeterminación del remitente y destinatario del mensaje que no brinda la validez buscada, si se diera razón a que esa intervención del promotor tenía el propósito de completar el saldo insoluto de la base generado por la anterior administradora, atendiendo a que era de conocimiento de sus superiores cuyo reporte era incluido en el cierre diario, carece de sentido enmendarlo en la fecha de la auditoría sin aviso para evadir dificultades que en ese contexto no tendrían por qué suscitarse, pues claramente al estarse en frente de una situación verificable, por contar con

los soportes respectivos y la autorización precisa de sus jefes inmediatos, ese dinero no habría sido incluido en la forma y el momento demostrado.

Y es que aunque no se desecha la declaración de Jazmín Rivas, quien enuncia haber tenido conocimiento del faltante Pedro Ballén y María José Sosa como superiores, personas que no intervinieron bajo ninguna calidad en este trámite, la conducta reprochada como bien lo enfatizó Marta Londoño no se trató del faltante y así se dejó despejado desde el escrito de contestación, sino el modo en que el actor intentó cubrirlo para que según su dicho “*no lo incriminaran*”, lo que da cuenta de un mecanismo utilizado contrario a las políticas administrativas propias de su cargo (Págs. 1-10/007), circunstancias que conllevaron al dador del empleo a aducir que la falta cometida concierne a la enlistada en el numeral 10 del artículo 62 del CST transcrita al inicio de las consideraciones de esta providencia, debiendo señalarse que en lo que respecta a lo que debe entenderse por el vocablo “sistemático”, la H. Corte Suprema de Justicia ha enunciado que esa inejecución de las funciones debe ser regular, periódica o continua, que apunte a demostrar que el trabajador ha tomado la conducta o el propósito de incumplir (Ver SL713-2019), teoría a partir de la que no es dable atribuir tal causal para dar por terminado con justicia el contrato de trabajo del demandante, en tanto se trató de un único hecho demostrado que no cuenta con las aludidas características.

Pese a lo previo, como quiera que la alta Corporación ha adocinado también que en la carta de despido, al empleador le basta con identificar los motivos concretos que dan lugar a ello, de manera que, en ese momento, le permita al trabajador conocer las razones que generan esa determinación a efectos de ejercer el derecho de defensa y garantizar la contradicción oportuna, correspondiéndole al juez de trabajo verificar si las invocadas están o no tipificadas en el ordenamiento aplicable (SL4545-2018 y SL2923-2022), a juicio de este cuerpo colegiado el acto efectuado por el señor Fabián Lopera en el manejo de dinero a su cargo como administrador contraría los deberes contenidos en los numerales 4, 5 y 13 del artículo 80 del Reglamento Interno de Trabajo que en su orden predicen: 4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu leal de colaboración en el orden moral y disciplina general de la Empresa; 5. Ejecutar los trabajos que se le confíen con honradez, buena voluntad y de conformidad con los procedimientos internos y órdenes del supervisor; y 13. Decir la verdad en todo caso, violación que si bien en virtud a lo dispuesto en el artículo 89 del mismo

estatuto reglamentario da lugar al finiquito del contrato de trabajo cuando ocurre por segunda vez (Pág. 21/006), en los términos del numeral 1° del artículo 58 del CST, esos fundamentos de hecho comprobados enrostran la insatisfacción de una de las obligaciones especiales que le asistían al promotor de la Litis como administrador de punto de venta referida a “*observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el patrono o sus representantes...*”.

En lo que atañe a la gravedad de la conducta, característica necesaria para sustentar la justicia de la extinción unilateral del vínculo, se tiene que el compendio institucional en su capítulo XVIII contiene una escala de faltas y sanciones disciplinarias, y aunque no contempla de manera expresa una graduación para entender que esta conducta particular sea vista a los ojos de los que integran la compañía como grave o leve, si regula unas circunstancias de agravación impuestas en el parágrafo segundo del artículo 90, cuyo numeral 7° reza: “*haber cometido la falta aprovechando la confianza que en el funcionario había depositado su superior*”, y se atiende además, de cara a las facultades del fallador para definir esa connotación de grave (Ver SL3278-2022), a factores como la labor desarrollada por el trabajador, el contexto, responsabilidad y demás condiciones del objeto para el cual es contratado (Ver SL8002-2014 y SL3125-2022), de donde se encuadra el comportamiento de inobservar, desacatar e incumplir los preceptos reglamentarios y las órdenes emanadas en cuanto a los procedimientos para el desarrollo de sus funciones administrativas, en una violación grave de parte del suplicante de las obligaciones que le incumbían como trabajador, en razón a su cargo en el que radicaba la responsabilidad de los dineros del restaurante en cuanto a la asignación de bases, retiro de cajas, consignaciones y arqueos (Pág. 1/007), la que por sí misma implica un riguroso control y especial cuidado, en tanto se trata de la manipulación de los bienes de la empresa que le fueron encomendados, por lo que evidenciado un proceder inadecuado descubierto dentro de una auditoría, se disipa la confianza destinada a quien se le entregó un punto de venta con la convicción de que obra bajo condiciones de lealtad, honradez, verdad y obediencia a las instrucciones preestablecidas para los diferentes procesos, comportamiento entonces que da lugar a que el fenecimiento del vínculo se constituya en justo y legal.

Bajo esas reflexiones la decisión revisada en apelación habrá de ser confirmada, sin imposición de costas por el beneficio del amparo de pobreza concedido al señor Fabián Lopera Naranjo.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA íntegramente** la sentencia apelada, de fecha y procedencia conocidas. Sin costas.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310501920180017601
Proceso:	Ordinario
Demandante:	FABIAN ESTIV LOPERA NARANJO
Demandado:	IRCC S.A.S. INDUSTRIA DE RESTAURANTES CAUSALES S.A.S.
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	24/11/2022
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 25/11/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario